



El Estado frente a emergencias: lecciones del pasado y desafíos



Nelson Cárcamo Barrera
profesor

Chile, por su ubicación geográfica, está expuesto a una serie de fenómenos naturales que, cada cierto tiempo, nos recuerdan la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de nuestras estructuras. El terremoto del 27 de febrero de 2010, que dejó una huella profunda en nuestra memoria colectiva, es uno de los ejemplos más claros de cómo la actividad sísmica puede impactar de manera devastadora nuestro país. Ese fatídico evento nos mostró que, aunque no podemos evitar los desastres naturales, sí tenemos la responsabilidad de prepararnos y minimizar los daños.

A lo largo de la historia, hemos visto cómo el Estado ha ido asumiendo progresivamente un rol más activo en la prevención y respuesta ante emergencias. Sin embargo, el reciente apagón eléctrico que afectó a gran parte del país ha dejado al descubierto falencias que, en pleno siglo XXI, deberían haberse abordado hace mucho tiempo. La interrupción del suministro eléctrico, por ejemplo, nos sumerge nuevamente en la reflexión sobre la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras críticas y la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad y bienestar de la población en situaciones de crisis.

En el caso del terremoto del 27F, las lecciones aprendidas fueron claras: la falta de coordinación efectiva entre los organismos responsables, la insuficiente información a la ciudadanía y la tardanza en las respuestas agravaron la tragedia. En el apagón reciente, lo que queda claro es que un país como Chile, con su historial de desastres naturales, no puede permitirse una vulnerabilidad tan alta en algo tan esencial como la energía eléctrica.

Uno de los problemas que estos eventos exponen es la falta de una cultura de prevención efectiva y la necesidad de medidas más contundentes por parte del Estado. No se trata solo de reaccionar ante el desastre, sino de anticiparse a él. La prevención debe ser prioritaria, con un monitoreo constante de las infraestructuras críticas, la actualización de protocolos y una comunicación clara con la ciudadanía. No basta con informes y estudios; se necesita acción inmediata.

En emergencias como estas, la información es clave. No solo las autoridades deben estar preparadas, sino también la población. Los ciudadanos deben tener acceso a información clara, actualizada y confiable sobre qué hacer en caso de un evento similar. La falta de información genera angustia, como ocurrió durante el apagón, cuando miles de familias quedaron en la incertidumbre sin saber qué estaba sucediendo ni cuánto duraría la interrupción del servicio. Esto no solo pone en riesgo la seguridad física de las personas, sino también su estabilidad emocional.

En vez de buscar culpables, lo urgente es corregir las fallas del sistema y establecer medidas preventivas eficaces. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos, y para ello, debe involucrar a todos los actores pertinentes: desde las empresas que gestionan servicios básicos hasta las autoridades locales y nacionales encargadas de la respuesta ante emergencias.

Es fundamental que las autoridades demuestren liderazgo y conocimiento en la materia. La ciudadanía necesita voces autorizadas y sin ambigüedades que orienten las acciones a seguir en momentos de crisis.

La experiencia del 27F nos dejó la lección de que la improvisación y la falta de preparación cuestan vidas. El reciente apagón, es una advertencia de que seguimos siendo vulnerables. No podemos esperar a que otro desastre nos golpee para empezar a actuar. Chile, como país expuesto a múltiples amenazas naturales, debe estar preparado, y eso solo será posible si el Estado asume su rol con responsabilidad, liderazgo y una visión de futuro que ponga la seguridad de todos en primer lugar.

Es momento de que la seguridad nacional se convierta en una prioridad constante. No podemos seguir confiando en que "no volverá a pasar". La naturaleza es impredecible, pero nuestra preparación no debería serlo.